En cualquier caso, es ésta una tarea que no se realiza solo en Naciones Unidas, si bien esta organización es un foro totalmente singular y privilegiado. Debe ser reconocido el esforzado trabajo de los re-

presentantes de la Santa Sede allí, y sea bienvenida esta obra que contribuye a difundirlo.

Carlos SOLER

Roberto SARTOR, *Le convenzioni tra il Vescovo diocesano e il Superiore di un istituto missionario a norma del can. 790 § 1, 2º del CIC. Prassi della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2011, 377 pp.

Se trata de un interesante y detallado estudio sobre los acuerdos entre Obispos y Superiores religiosos en territorios de misión, con especial referencia al can. 790 y con una amplia descripción de la praxis histórica y actual de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada.

En la introducción, el autor enmarca su estudio –una tesis doctoral en derecho canónico defendida en la Pontificia Universidad Gregoriana– dentro de la acción misionera de la Iglesia. Si bien el autor se detiene en un estudio y análisis histórico de la cuestión, su objetivo es aportar elementos que contribuyan a una reglamentación más actualizada de dichas relaciones, subrayando la necesidad de garantizar ante todo la comunión eclesial entre los distintos componentes y miembros de la Iglesia.

Con el fin de comprender la problemática de los acuerdos entre Obispos diocesanos y Superiores religiosos en territorios de misión, el autor sitúa su tesis, en un primer momento, dentro del derecho misionero de la Iglesia y, en una segunda

parte, en el marco del Código de derecho canónico de 1983. Destaca cómo en el Código vigente la acción misionera de la Iglesia se sitúa dentro del epígrafe del *munus docendi*.

En clave histórica, el primer capítulo está dedicado al período que va de la fundación de la Congregación *de Propaganda Fide* (CdPF) al papado de Gregorio XVI; es decir, del 1622 al 1846. Más de dos siglos de historia muy significativos para el tema de este estudio, ya que en ellos se inician los primeros contactos entre misioneros y Vicarios y Prefectos apostólicos en territorios de misión, gracias a la vigilancia de la CdPF. Además, a nivel normativo, con la Constitución apostólica *Inscrutabili* de 1622, y las posteriores instrucciones emanadas de la CdPF, se pusieron las bases para la formación de un auténtico derecho misionero, que era muy importante en relación a las órdenes e institutos religiosos.

En el segundo capítulo continúa el análisis histórico, cubriendo la etapa de Gregorio XVI a la Instrucción *Quum*

Huic, del 8 de diciembre de 1929, emanada por la CdPF.

Destaca el autor, además del florecimiento de la actividad misionera de la Iglesia durante dicho período, la aparición del instituto canónico de la “comisión”, que marca el inicio de una normativa que se irá desarrollando para regular la relación entre los misioneros y los superiores eclesiásticos de las misiones, ya sean Vicarios o Prefectos Apostólicos o Superiores religiosos en una misión asignada al Instituto o Congregación por la Santa Sede a través de la CdPF.

Una síntesis del Magisterio conciliar y postconciliar viene presentada en el tercer capítulo. El autor desarrolla aquí los aspectos teológicos, y en concreto eclesiológicos, que tanto en el Concilio Vaticano II como en el Magisterio posterior, sin olvidar la Carta encíclica *Redemptoris Missio* del Beato Juan Pablo II, ponen las bases para el Código de 1983. El objetivo de este capítulo es indicar los desafíos que se presentan a la Iglesia misionera, y qué caminos podría recorrer la Iglesia para entrar en diálogo con el mundo.

Después de una visión panorámica, el capítulo cuarto se centra en el n. 32 del Decreto *Ad Gentes*, que sirve de fundamento teológico para la redacción del can. 790 del CIC, tema central de la tesis. Desde un prisma histórico, el autor descubre el origen y desarrollo de este número dentro del Decreto *Ad Gentes*, comenzando desde las fases antepreparatoria y preparatoria. Citando a varios Padres conciliares, destaca la llamada urgente a considerar la vida consagrada según su especificidad teológica y su vocación apostólica al servicio de la Iglesia en un clima de colaboración y diálogo con

los pastores locales. Se subraya de nuevo cómo la cuestión del reclutamiento vocacional, realizado por los institutos religiosos, seguía siendo el perenne motivo de conflicto con la Iglesia local, que se veía amenazada en su crecimiento numérico.

Dentro de este mismo cuarto capítulo, el autor se detiene en analizar también la Instrucción *Relationes in territoriis* de la CdPF, de 1969. Después de un amplio estudio histórico sobre la génesis de la Instrucción, el autor se centra en explicar el sistema del “mandato”, ya que la Instrucción suprime el régimen de la “comisión”, y propone acuerdos particulares entre las partes interesadas. Este nuevo régimen del “mandato” es aplicable únicamente a aquellas circunscripciones eclesiásticas que ya hayan sido erigidas en diócesis. Con el “mandato” se crea un nuevo instrumento jurídico conveniente para regular las relaciones entre institutos religiosos y Obispos diocesanos, aunque no obligatorio. También el Obispo diocesano puede admitir a un instituto religioso a trabajar pastoralmente en su diócesis con toda libertad, sin ningún tipo de convención con dicho Instituto.

El quinto capítulo, que desde el punto de vista canónico podríamos considerar el capítulo central del texto, está dedicado a la normativa vigente, es decir, al can. 790, que se ocupa de la conveniencia de establecer convenciones entre los Obispos diocesanos y los Superiores de los Institutos religiosos presentes en territorios de misión. El autor presenta con detalle las diversas etapas que llevaron a la redacción del can. 790, partiendo de una visión general de la génesis del Código, y siguiendo con un análisis de los diferentes

esquemas elaborados hasta llegar al texto final.

Destaca el autor cómo este canon 790 se encuentra dentro del Título II *De actione Ecclesiae missionali*, del Libro III del Código, “*De Ecclesiae munere docendi*”. Pues el Código ha optado por incluir la acción misionera en cuanto tal como parte específica de la función de enseñar, y sobre la base de la naturaleza misionera de toda la Iglesia, definida claramente por el Concilio Vaticano II. De este modo, el así llamado “derecho misionero”, es decir, el conjunto de normas canónicas que regulan la vida eclesial en territorios de misión, pasa a quedar integrado en el Derecho común.

Para comprender la actividad misionera de la Iglesia y su regulación jurídica, es importante definir “los territorios de misión”. En concreto, el § 1, 2º del can. 790 se refiere a la circunscripción eclesiástica más que a la actividad misionera en sí. Por ello, el término “misión” se podría aplicar tanto a las diócesis como a los territorios no erigidos en diócesis, como son los Vicariatos apostólicos, las Prefecturas apostólicas y las Misiones *sui iuris*.

Respecto a las relaciones entre los misioneros y el Ordinario del lugar según el can. 790, el autor subraya, como lo hace todo el Código, que la autoridad máxima recae sobre el Ordinario. Por lo que se refiere a la competencia del Obispo diocesano sobre las obras y actividades de la misión, el can. 790 § 1 sólo aplica el principio general del can. 381 § 1. Por lo que se refiere a la competencia del Obispo diocesano en relación con las personas, el can. 790 § 2 aplica la norma del can. 678 § 1, que indica que todos los religiosos están sujetos a la potestad de los Obispos

diocesanos en todo lo que se refiere a la actividad pastoral.

Es interesante la comparación que hace el autor entre el tenor literal del can. 790 y de los cann. 678 y 681, concluyendo que un Obispo diocesano en un territorio no misionero tiene mayor obligación de establecer una convención con el competente Superior religioso. Por su parte, el Obispo diocesano de un territorio de misión parece gozar de mayor libertad para decidir si establece o no tales contratos con los superiores religiosos de los misioneros presentes en su diócesis.

El capítulo VI, casi una cuarta parte del estudio, se titula “Praxis de la Congregación O.M.I.” (Oblatos de María Inmaculada). El autor, miembro de dicha Congregación, realiza un amplio estudio histórico desde los inicios de la Congregación, mostrando cómo el derecho propio se ha ido adecuando a lo largo del tiempo tanto a las nuevas realidades que iban surgiendo en la actividad misionera del Instituto, como a la normativa canónica emanada por la CdPF. A lo largo de su historia, la Congregación O.M.I. estableció distintos tipos de acuerdos o convenciones con los Obispos diocesanos, con el fin de salvaguardar el carisma propio y para regular las cuestiones económicas de sus misioneros en los territorios de misión. En todos estos documentos se subraya la voluntad de ambas partes de proceder siempre de común acuerdo a la hora de aplicar y revisar el texto, sobre todo a la hora de tratar cuestiones relativas a las situaciones personales de los misioneros, respetando siempre su parecer a la hora de definir su ministerio y las circunstancias en que han de desarrollarlo.

Si bien este último capítulo tiene un indudable interés histórico y misionero, resulta, a mi juicio, excesivamente largo. Creo que también podría ser oportuno completar el estudio con una comparación entre el documento *Mutuae Relationes* y la normativa vigente.

En las Conclusiones, el autor subraya la gran necesidad de convenciones entre Obispos diocesanos y Superiores religiosos en territorios de misión, como medio privilegiado para garantizar tanto la centralidad y autoridad del Ordinario del lugar en la Iglesia local como la autonomía propia del carisma de cada instituto misionero. Considera fundamental que en las convenciones se establezca con cla-

ridad los términos de la colaboración de ambas partes, sin olvidar el aspecto económico y financiero, que no siempre es fácil para muchas Iglesias misioneras.

El estudio desarrolla esta normativa jurídica que hemos comentado como cauce para la comunión entre el Obispo y los misioneros presentes en su territorio. En este momento de la historia de la Iglesia, de gran impulso a la nueva evangelización, tal normativa podría ser aplicada a los sacerdotes diocesanos vinculados a las nuevas realidades eclesiales que envían a sus sacerdotes a otras diócesis con el permiso del Obispo de la diócesis de origen.

María AREITIO

Christian WIRZ, *Das eigene Erbe wahren. "Anglicanorum Coetibus" als kirchenrechtliches Modell für Einheit in Vielfalt?*, Ludgerus Verlag, Essen 2012, 253 pp.

En noviembre de 2009, mediante la Constitución apostólica *Anglicanorum Coetibus*, Benedicto XVI creaba la figura de los ordinariatos personales, para acoger en la Iglesia Católica a fieles provenientes de la Comunión Anglicana conservando parte de sus tradiciones litúrgicas, pastorales y espirituales. Desde entonces han sido erigidos tres ordinariatos personales: Our Lady of Walsingham (OLW) en Inglaterra y Gales, (15 enero 2011); The Chair of Saint Peter (TCSP) para Estados Unidos y Canadá (1 enero 2012); y Our Lady of the Southern Cross (OLSC) en Australia (15 junio 2012). En total, alrededor de 4.000 fieles laicos han

sido recibidos en la Iglesia Católica a través de los ordinariatos personales; y unos 120 ministros anglicanos casados y 2 célibes han sido ordenados como sacerdotes católicos. Además, numerosos grupos de fieles laicos y ministros anglicanos se encuentran actualmente en preparación para seguir ese camino.

La creación de los ordinariatos personales suscitó cierto debate doctrinal, en la medida en que no queda aún claro si la Constitución apostólica *Anglicanorum Coetibus* crea una nueva circunscripción personal o aplica el modelo de los ordinariatos militares, pasando a ser los ordinariatos personales una especie dentro del género